

PROPOSICIÓN

PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA “Por medio del cual se sustituye el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 599 del 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”.

Modifíquese el Art 1, en su subartículo 328. Quedará Así:

Artículo 328. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, recolecte, use, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, adquiera, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, ~~hídricos~~, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del cuerpo al mar.

Cordialmente



CARLOS ARDILA ESPINOSA
Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

JUSTIFICACIÓN

Antes de la enmienda habíamos presentado una proposición en idéntico sentido, y que aparentemente se habría solucionado en la enmienda, pero consideramos que el asunto persiste.

En efecto, el texto anterior usa la expresión “agua”, dentro de la lista de recursos cuyo uso o provecho quedaría penalizado si no media autorización burocrática previa. En este texto se elimina la expresión “agua”, pero se emplea la expresión “hídrico”, con lo que el “recurso hídrico”, es decir, el agua, no podría ser usada sin permiso previo de la autoridad competente.

Esto es sumamente inconveniente, pues implica la estatización del agua y genera un obstáculo muy grande para los ciudadanos de los departamentos que no tienen personal suficiente en las CAR y demás entidades encargadas de expedir licencias y autorizaciones.

¿cómo consumirán, usarán o aprovecharán agua los indígenas del Putumayo, si el departamento tiene tan solo UN técnico para atender todas las visitas y solicitudes de todas las fincas, resguardos, y territorios que tengan habitantes que necesiten aprovechar el agua de quebradas o ríos?

El uso de las aguas debe estar regulado, más no penalizado. El agua no debe estar privatizada, pero tampoco estatizada o burocratizada hasta el punto de convertir el delito la falta de un permiso de la autoridad administrativa.

El agua es un recurso natural que tiene las características de un bien común, y como tal, su protección y sus mecanismos de adjudicación no son necesariamente los del mercado ni la extrema regulación estatal, pues ello implica o bien la privatización o bien la estatización.

Ambos extremos son peligrosos y durante toda nuestra historia el agua ha escapado a este tipo de regulaciones, justamente, por considerarla un bien de primera necesidad que escapa a esas esferas de la política y el mercado, en tanto que es imprescindible para la conservación de nuestra especie y de nuestra vida.

Por eso la literatura económica habla de otros mecanismos para la protección de los bienes comunes, entre los que tenemos al agua, como lo es la difusión de la información sobre los usos que los integrantes de la comunidad le dan al recurso. De esa manera los actores pueden saber si deben consumir más o menos peces, más o menos agua, de acuerdo a la época del año y al uso que los demás le dan al recurso.

De cualquier modo, la penalización del uso del agua sin permiso burocrático previo es un extremo muy inconveniente que debemos evitar en este proyecto de ley, que en otros aspectos es muy conveniente y necesario.

PROPOSICIÓN

PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA “Por medio del cual se sustituye el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 599 del 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”.

Elimínese el artículo 4A del artículo 1 del proyecto de ley.

~~**Artículo 334A. Contaminación ambiental por explotación de minerales, hidrocarburos y otros materiales.** El que contamine directa o indirectamente la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, como consecuencia de la actividad de exploración, construcción, montaje, extracción, explotación, beneficio, transformación, acopio, transporte, cierre, desmantelamiento o abandono de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de setenta y cinco (75) a ciento cincuenta (150) meses, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~

~~La pena se aumentará hasta en una tercera parte si la contaminación se produce como consecuencia de la minería a cielo abierto.~~

Cordialmente



CARLOS ARDILA ESPINOSA
Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a concepto del Consejo Superior de Política Criminal en estudio que se hiciere de este proyecto, una redacción como la de este artículo impide distinguir la actividad minera o de hidrocarburos lícita de la ilícita.

Toda actividad minera o de hidrocarburos genera necesariamente una contaminación en la atmósfera, el suelo o las aguas. La diferencia radica en qué tipo de contaminación es tolerable y cuál no. Esta redacción impide hacer distinciones entre las contaminaciones tolerables o lícitas de las ilícitas, y por lo tanto genera inseguridad jurídica en las actividades que hoy son lícitas.

Adicionalmente, este tipo penal tiene el problema de la individualización de los agentes activos del delito y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿cómo determinar la responsabilidad? ¿se judicializará al gerente, a los accionistas, al empleado, al operario, a la junta directiva o a la persona jurídica?

Esta norma tiene defectos en materia de técnica penal como los mencionados que justifican su eliminación.

PROPOSICIÓN

PROYECTO DE LEY NÚMERO 283 DE 2019 CÁMARA “Por medio del cual se sustituye el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 599 del 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”.

Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley

ARTÍCULO 5°. Adiciónese un párrafo al artículo 91 de la Ley 906 del 2004, el cual quedará así:

(...)

Parágrafo. Cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisión definitiva en la sentencia correspondiente.

Cordialmente



CARLOS ARDILA ESPINOSA
Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

JUSTIFICACIÓN.

Se adiciona la expresión “**con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar**”, para limitar la facultad del Estado en la limitación de los derechos civiles, comerciales y económicos de un ciudadano que hasta el momento no está condenado, sino apenas siendo juzgado.

El artículo 5 del proyecto de ley aumenta considerablemente la capacidad del estado para aplicar verdaderas sanciones precautelativas, como lo es la contemplada en el artículo 91 de la ley 906¹, que consiste en la **Suspensión y cancelación de la personería jurídica**. Una facultad bastante severa que tiene el estado contra los imputados o incluso indiciados, pero que hoy por hoy recae únicamente sobre la persona jurídica, y los derechos que tenga el imputado sobre ésta, más no sobre la posibilidad de abrir otras opciones de trabajo y sustento mientras se atraviesa el juicio y se sigue presumiendo la inocencia de quien atraviesa por un proceso penal,

El Congreso debe ser muy cuidadoso con las facultades que se le otorga al juez antes de la condena, pues no se puede asumir que todos los indiciados o imputados son culpables y merezcan la muerte comercial y económica sin fórmula de juicio. Es más la jurisprudencia muestra que incluso las condenas que prohíben la profesión de comercio u oficio se limitan al área en la que se cometió el mismo delito, de manera que el condenado puede trabajar en otras áreas durante la ejecución de su pena.

Por eso con esta proposición se busca limitar la facultad de imponer medida cautelar a la persona indicada o imputada, únicamente en la misma actividad económica a desarrollar, con el fin de respetarle el núcleo esencial del derecho al trabajo, a obtener personería jurídica, entre otros derechos fundamentales que están en cabeza de quien aún no ha sido condenado y se presume su inocencia.

¹⁴ **En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía**, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.”